

Juzgado de Letras Lautaro

Lautaro, seis de octubre de dos mil veintitrés

VISTO Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Con fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés comparece don PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ, chileno, casado, de profesión Abogado, cédula nacional de identidad N° 16.658.896-0, domiciliado para estos efectos en Avenida las Condes N°11.380, oficina N°91, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, en calidad de mandatario judicial, de don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO, chileno, soltero, técnico en administración, cédula de identidad N° 15.235.517-3, domiciliado en Espacio Cerrano 250, comuna de Perquenco, región de la Araucanía, quien deduce demanda en Procedimiento de Aplicación General Laboral por Reconocimiento de Relación Laboral, Nulidad del Despido, Despido Indirecto Justificado y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra de la ex empleadora de su mandante, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO, Rol Único Tributario N°69.190.900-K, cuyo representante legal es don Luis Alejandro Sepúlveda Tapia, Alcalde, cédula nacional de identidad N°10.127.763-1, Chileno, desconozco profesión u oficio ambos domiciliados para estos efectos en Esmeralda N°497, comuna de Perquenco, de conformidad a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación paso a exponer:

Exposición clara y circunstanciada de los hechos.

Antecedentes de la relación laboral.

Su representado comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 02 de enero de 2012 a favor de la Ilustre Municipalidad de Perquenco y hasta su despido indirecto el 30 de diciembre de 2022. Todo el tiempo, trabajó mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo.

Durante todo el tiempo que su representado desempeñó sus servicios a favor de la demandada, trabajó como “Encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (en adelante “DIDECO”) de la Municipalidad de Perquenco además de realizar otras funciones que no eran propias de su cargo.

Cargo evidentemente genérico, no accidental y habitual en la organización jerárquica de la Municipalidad de Perquenco. Durante todo el periodo estuvo sujeta a jornadas de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNXXGRXHK

trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.

En efecto, el contrato celebrado con la demandada constituye una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponde a aquellos denominados “Contrato de Honorarios”. En la especie, corresponde imputarle bajo el principio de la supremacía de la realidad la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia como se expondrá más adelante.

Agrega que su representado durante todo el tiempo que trabajó a favor de la demandada, esto es más de 10 años 11 meses y 28 días, realizó numerosas funciones, y en virtud de éstas, es que se fueron extendiendo sus labores por un extenso periodo, lo que se podrá verificar mediante los contratos y demás pruebas.

Expone que la Ilustre Municipalidad de Perquenco constituye una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Perquenco y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la misma.

Regulación de la relación laboral:

Previo a determinar el régimen jurídico aplicable a la relación jurídica laboral entre su representado y el Municipio de Perquenco, como marco regulatorio, señala qué regímenes estatutarios no fueron aplicables.

Indica que la mandante nunca fue contratada como funcionaria municipal en ninguna de sus categorías conforme lo dispuesto por la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, debido a que no ingresó a prestar servicios en la forma que dichas normativas especiales prevén, ni en las condiciones que esa normativa establece: planta; contrata; suplente.

Siendo persona natural, su representado tampoco estuvo sometido a un estatuto especial de aquellos que aplican en el Municipio.

Expone que según los contratos celebrados por la mandante y la prueba que se rendirá en la oportunidad procesal correspondiente, esta prestó servicios como Encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (en adelante “DIDECO”) de la Municipalidad de Perquenco, obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: realizar



atención a público, archivar documentos, llevar sistema integral social, cursos para mejora del servicio, analizar posibilidad de acceso a beneficios para usuarios del programa, Entre otras funciones.

Lo anterior, no obsta a que las funciones se fueran ampliando durante la extensión de su período laboral, puesto que sus ocupaciones fueron muchas más de las que se especifican en esta demanda, como ir a bodegas para recepción de materiales, tener responsabilidad administrativa, retirar sillas y toldos de eventos.

Conforme lo anterior, y a pesar de las numerosas funciones descritas en los párrafos anteriores, se le contrató bajo la norma del artículo 4 de la Ley N° 18.883, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias.

Sin embargo, dicha disposición establece determinadas exigencias adicionales cuales son:

a) Que tales materias no sean las habituales de la municipalidad; b) Que se trate de cometidos específicos; c) Que sean transitorios y temporales.

Que las labores prestadas por su representado jamás fueron no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se pueden catalogar de transitorios y temporales, puesto que como se respaldará en la etapa procesal correspondiente la relación con la ex empleadora se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión.

Hace mención a lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Reemplazo del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 11.584-2014, de fecha 01 de abril del año 2015, caratulado “Juan Pablo Vial con Municipalidad de Santiago” (Considerando Octavo).

Expone que la situación fáctica del anterior fallo es equivalente a la relación laboral que vinculó a mi representado con la Ilustre Municipalidad de Perquenco, desde el momento en que los servicios se extendieron por 10 años, 11 meses y 28 días, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida.



Juzgado de Letras Lautaro

De lo antes dicho, resulta claro que las funciones que desarrolló su representado a favor de su ex empleadora no reunían las exigencias que para ello establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, norma excepcional que, por lo demás, debe ser interpretada en sentido estricto y restringido, y que considera dichas exigencias sólo para aceptar la existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva.

Así entonces, no estando bajo un estatuto laboral especial conforme al artículo 1 inciso 2 del Código del Trabajo,

Antecedentes del término de la relación laboral.

Señala que la relación laboral entre mi representado y la Ilustre Municipalidad de Perquenco terminó el día 30 de diciembre de 2022, fecha en la cual conforme lo establece el artículo 171 inciso 4° del Código del Trabajo, mi mandante decidió autodespedirse, y en consecuencia comunicó por escrito a la demandada, su decisión de poner término al contrato de trabajo por haber incurrido ésta en la causal contemplada en el artículo 160 N°7 del mismo cuerpo normativo, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, enviando copia de esta comunicación a la respectiva Inspección Comunal.

Señala que los mencionados incumplimientos establecidos en la carta de despido indirecto que se atribuyeron a la ex empleadora de su representado son los siguientes:

- El no pago de las cotizaciones de Seguridad Social. Que se traduce en el incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Ley 3.500, asimismo se infringe lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.
- La no escrituración del Contrato de Trabajo. Lo que se opone directamente a lo establecido en el Artículo 9° del Código del Trabajo
- No otorgamiento del feriado legal durante el periodo trabajado, en conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo.

Estos hechos revisten el carácter de incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, incumplimientos que se extendieron durante toda la vigencia de la relación laboral, sin que la demandada remediara su comportamiento.

Índices de Subordinación y Dependencia:

Resulta indispensable para los efectos de este libelo, centrar la atención en las cuantiosas diferencias que existen entre un contrato de trabajo y uno a honorarios, toda vez que la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

demandada no consideró al momento de celebrar contratos de honorarios con mi representado, el estatuto jurídico idóneo que resultó en su momento aplicable.

En tal sentido, la empleadora consideró de forma unilateral las condiciones de dicho contrato y en definitiva no reconoció que en la práctica y más allá de lo que señalen los documentos, que la relación entre el mandante y el municipio constituyó un contrato de trabajo y, por ende, se alejaron claramente de lo que contempla un contrato de honorarios. Todo lo anterior basado en las siguientes diferencias que se suscitaron entre los documentos físicos y los hechos realmente acontecidos en la realidad:

a) Forma que puede revestir la prestación:

- El contrato de trabajo sólo puede revestir una forma, que es la que se estipula en el contrato para la prestación de servicios.
- El contrato a honorarios admite en la práctica dos formas; como contrato de arrendamiento para la confección de una obra material y como contrato de arrendamiento de servicios.

En la especie, su representado prestó servicios a favor de la Municipalidad de Perquenco como “Encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (en adelante “DIDECO”) de la Municipalidad de Perquenco, obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: realizar atención a público, archivar documentos, llevar sistema integral social, cursos para mejora del servicio, analizar posibilidad de acceso a beneficios para usuarios del programa, Entre otras funciones.

Lo anterior, implica un cargo que figuró como habitual de la institución, y que conforme a ello no pudo adoptar la forma de un contrato de arrendamiento de obra material ni de servicios.

b) En cuanto a la forma en que se prestan los servicios:

- En el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios de manera permanente y que se constituyen como propios de la institución.
- En el contrato a honorarios el profesional presta sus servicios de forma independiente, a título de asesoría, consulta o investigación respecto de un trabajo o bien en función de una obra o proyecto determinados.



La mandante prestó servicios a favor de la Municipalidad de Perquenco durante 10 años 11 meses y 28 días, de forma constante, sujeto a una jornada de trabajo.

Es dable inferir que las labores las desarrolló en un contexto de permanencia y en razón a una labor intrínseca de la propia municipalidad, es decir, como funciones propias de la institución.

En efecto, la labor durante el tiempo de su contrato no correspondió en la práctica a la ejecución de labores específicas como consultorías o de asesoría, siendo éstas últimas propias de la contratación a honorarios.

Que la Ilustre Municipalidad de Perquenco constituye una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Perquenco y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la misma.

c) En cuanto a las órdenes que pueda impartir el empleador:

- En el contrato de trabajo, el trabajador está constantemente sometido al deber de obediencia, claro índice de existir una relación de subordinación y dependencia.
- En el contrato a honorarios, el profesional no recibe órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo. Podría recibir eventuales lineamientos en cuanto a la ejecución del servicio, pero no órdenes directas de quien asume el precio del servicio.

En la especie durante todo el periodo por el cual se extendió la relación laboral, el mandante fue objeto de instrucciones por parte de su jefatura directa, Alejandra Ulloa Garcés, encargada del Registro Social, y Claudia Mellao Marín, Jefa de departamento; , estando sujeto en todo momento a la observancia de este, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador y en las funciones que se consignan en los contratos celebrados.

Estas instrucciones se verificaban diariamente de forma verbal, por correos electrónicos, llamados telefónicos, y/o mensajes enviados a través de la aplicación WhatsApp, por parte de su jefatura, como se probará en la oportunidad procesal correspondiente.

En tal sentido, su representado, con ocasión de su cargo, y acorde la subordinación sujeta de su jefatura, debía realizar funciones ajenas a su cargo, como lo serían el ir a



bodega a recibir materiales, responsabilidad administrativa, entregar materiales, los mandaron a velorios, retirar sillas y toldos, colocar sillas y toldos, entre otros.

La constante dirección de la jefatura directa no constituye un simple lineamiento, sino que un claro ejemplo de existir un vínculo de subordinación y dependencia. Las directrices fueron claras, precisas y ejercidas directamente sobre la persona del mandante, sin posibilidad alguna de negarse a la ejecución de dichas instrucciones.

d) En cuanto a la obligación de cumplir con una jornada de trabajo y de asistir regularmente a la empresa:

- En el contrato de trabajo, el trabajador no solo tiene la obligación de asistir a prestar sus servicios, sino que también debe hacerlo de forma regular y periódica en las dependencias de la empresa, de manera tal que constituye una obligación el cumplir con la jornada de trabajo pactada en el contrato. Esto constituye un índice de una relación de subordinación y dependencia.
- En el contrato a honorarios, el profesional no está obligado a asistir regularmente a la empresa. "Puede ser que asista con motivo de su trabajo, pero en ningún caso de manera regular ni menos cumplir con una jornada de trabajo.

En la práctica su representado cumplió con una jornada de trabajo que se distribuía de lunes a viernes de 08:37 a 17:25 horas; tal como se acreditará en la etapa procesal correspondiente.

Agrega que su representado, registraba su entrada y salida de la jornada en un reloj biométrico implementado por la Municipalidad para dichos fines, y durante el periodo de pandemia, el registro se efectuaba a través de correo electrónico.

Así las cosas, esto no condice con las características propias de un contrato de honorarios, sino con uno de carácter subordinado y dependiente del empleador, esto es, un contrato de trabajo.

e) En cuanto al lugar y regularidad en la prestación de servicios:

- En el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios en las dependencias de la institución, de forma regular y continua y en el caso en específico en terreno.
- En el contrato a honorarios, el profesional trabaja por su cuenta y la asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua o puede ser que siquiera exista.



En la especie, su representado, cumplió su jornada laboral en las dependencias municipales, de la comuna de Perquenco; como también en terreno, en los diferentes sectores a donde su jefatura le enviase.

Por otro lado, contaba con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa, esto es, credencial y correo institucional, computador y escritorio, oficina, entre otros; todos suministrados por el Municipio.

Asimismo, los contratos suscritos por la demandada y mi representado reconocen un grupo de beneficios, - Feriado legal, - Días administrativos, - Aguinaldos y - Horas compensatorias, entre otros.

f) En cuanto al pago por los servicios prestados:

- En el contrato de trabajo, la retribución que obtiene el trabajador a cambio de la prestación de servicios que realiza, se denomina remuneración.
- En el contrato a honorarios, el pago se denomina honorario.

Que, si bien en la práctica su representado emitió boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de Perquenco, en la práctica recibía la contraprestación directamente de la Dirección de Administración y Finanzas, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral.

Conforme al principio de la realidad y de acuerdo con la cotidianeidad del pago, esta constituía una forma de remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el cual se pagaba previa confección de un Informe Mensual de Gestión que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual el municipio guarda registro.

g) En cuanto a la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia:

- El contrato de trabajo es tal por existir entre el trabajador y el empleador una relación de subordinación y dependencia. Elemento propio de este tipo de contrato y que lo define.
- En el contrato a honorarios, no existe tal vínculo. Las partes solo se encuentran ligadas por una relación que se limita, por un lado, al cumplimiento del servicio específico respecto de la institución que lo contrata, y por otro, el prestador o profesional del servicio por la efectividad de recibir el pago u honorario.

Que de acuerdo a lo señalado, para probar la existencia de un contrato de trabajo no basta con acreditar la prestación de servicios personales, sino que es indispensable que



éstos se hayan realizado bajo dependencia y subordinación, elemento que se materializa cuando concurren diversas manifestaciones o elementos fácticos determinantes, tales como la obligación del trabajador de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es la jornada de trabajo; el cumplimiento de un horario diario y semanal; o que el trabajo sea realizado bajo ciertas pautas de dirección y organización que imparte el supuesto empleador; todas las cuales se configuran y definen en cada caso concreto por las particularidades y modalidades que presente la prestación de servicios del trabajador.

En la especie, entre el mandante y su ex empleadora existió por más de 10 años un vínculo de subordinación y dependencia. Todo esto, conforme a las labores que desempeñaba conforme a su contrato, a las jornadas de trabajo de las que fue objeto, las órdenes impartidas por sus superiores directos, con la asistencia diaria y extensiva en el tiempo a las dependencias de la Municipalidad y demás lugares en los cuales debía ejercer sus labores fuera de su jornada laboral, y sumado a todo lo anterior las constantes vigilancias de las que fue objeto en la prestación de sus labores.

Siendo todos estos hechos, claros índices de existir en la práctica una relación regida por el artículo 7° del Código del Trabajo, y que desconoció en todo momento la Municipalidad. Cuestión precisa que esta parte intenta probar, con el efecto de que constate y declare que dichos índices, constituyeron el reconocimiento que en la práctica ha sido cuestionado por la demandada, no procediendo tal discusión, toda vez que, constatado dichos índices procede necesariamente la declaración de relación laboral en la sentencia definitiva.

Estructura de remuneraciones.

Agrega que la remuneración de su representado al momento de efectuar el despido indirecto era por un monto de \$650.000 pesos mensuales.

Que la ex empleadora de su representado exigía a su mandante previo pago de la remuneración mencionada, la confección de un informe de gestión que se adjuntaba a la boleta de honorario emitida a nombre de esta. Dicho informe daba cuenta de las funciones desarrolladas por el demandante durante el periodo correspondiente a la mensualidad señalada en la boleta.

Que en cuanto a la nulidad del despido y del despido indirecto justificado.



Juzgado de Letras Lautaro

Por las razones explicadas anteriormente, su representado se vio en la necesidad de recurrir al derecho contemplado en el Artículo 171 del Código del Trabajo, esto es a autodespedirse, toda vez que su ex empleadora incurrió en la causal establecida en el artículo 160 N°7 del mismo cuerpo legal, esto es, incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato.

Hace mención al artículo 171 del Código del Trabajo.

Agrega que la demandada hizo caso omiso de lo preceptuado en el inciso 6° del artículo 162° del Código del Trabajo.

Sobre las cotizaciones adeudadas.

Expone que la empleadora adeuda, a su representado, cotizaciones de seguridad social correspondientes a cotizaciones previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía, por todo el período trabajado entre el día 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2022. Por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y condenar a su pago, para lo cual se debe ordenar oficiar a las entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza judicial.

Hace mención al artículo 162 inciso quinto y siguiente del Código del Trabajo.

Agrega que procede como ha señalado la jurisprudencia aplicar esta sanción de nulidad del despido a la Ilustre Municipalidad de Perquenco, puesto que actualmente se encuentra en mora de pagar las cotizaciones previsionales por lo que es merecedora de tal sanción.

Así lo ha señalado la propia Excelentísima Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. A modo de ejemplo citamos el reciente fallo que acogió un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 45.842-2016, de fecha 07 de diciembre del año 2016, caratulado “Farfán con Ilustre Municipalidad de Pucón” (Considerando Décimo Sexto).

Con todo, al haber pactado contratos a honorarios impropios durante todo el período que duró la relación laboral, la municipalidad en cuestión jamás efectuó el íntegro pago de las cotizaciones previsionales que ordena la ley respecto a las remuneraciones percibidas mensualmente, infringiendo de esta forma el artículo 58 y el inciso quinto del artículo 162, ambos del Código del Trabajo, además del artículo 19 del Decreto Ley 3.500.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

Expone que la ex empleadora, nunca dio cuenta del estado de las cotizaciones previsionales, y según registra el Fondo de Capitalización Individual, de mi representado, hasta el día de hoy éstas se encuentran en mora, de lo cual se colige debido a que es una de las causales por la cual se efectuó el despido indirecto.

Con todo, y en circunstancias de que las cotizaciones de seguridad social de su representado, y en particular sus cotizaciones previsionales se encuentran actualmente impagas por su ex empleadora, es que ésta se ha hecho merecedora de la sanción de nulidad establecida en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo.

Continuidad de los servicios.

La continuidad de las labores merece un capítulo aparte en la presente demanda, puesto que además de ser su declaración una de las peticiones concretas sometidos a US., el elemento de la continuidad es de aquellos que permite a ésta parte poder comprobar que las supuestas contrataciones a honorarios no eran tales, puesto que éste elemento de continuidad de labores en el tiempo, se opone a uno de los aspectos que configura el contrato de honorarios que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, puesto que la continuidad es absolutamente contraria al aspecto temporal y específico que admite este tipo de contrataciones.

Menciona que la continuidad en los presentes autos encuentra su comprobación en las sucesivas boletas de honorarios, emitidas por mi representado a favor de la I. Municipalidad de Perquenco, teniendo el carácter de mensuales y por montos equivalentes, los cuales fueron progresivamente en aumento, y en documentos que acreditan la permanencia de su representado desde 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2022.

Agrega que es la continua emisión de las boletas lo que comprueba que su representado prestó servicios de forma permanente y constante, dedicando su tiempo de forma exclusiva a la demandada, en los términos que lo realiza un trabajador sujeto a una relación laboral.

Consideraciones de derecho.

En cuanto a la calificación jurídica de la relación laboral.

Hace mención a la Constitución Política de la República consagra en sus artículos sexto y séptimo el denominado “Principio de Juricidad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

Conforme lo anterior resulta que las actuaciones de todos los poderes y órganos del Estado sólo tienen validez si reúnen las siguientes condiciones: a) Que el órgano del que emanen cuente con previa investidura regular; b) Que el mismo órgano haya obrado dentro de su competencia; y c) Que también haya obrado en la forma que prescribe la ley.

Luego, si no se reúnen todas estas condiciones el acto infringe el mencionado principio y, por consiguiente, se encuentra expuesto a ser anulado.

Agrega que existe una norma de rango constitucional que es la ya citada precedentemente, la cual ordena a todos los poderes y órganos del estado a actuar dentro del ámbito legal de sus funciones, y sólo en la forma que la ley prescriba.

Hace mención al artículo 4° de la Ley N° 18.883.

Agrega que dicha normativa, por la cual se faculta a los municipios contratar bajo la modalidad de honorarios, permite este tipo de contratación sólo para aquellos casos en los cuales deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de los municipios, además exige la referida norma que la prestación de estos servicios sea sólo para cometidos específicos.

En consecuencia, existe una norma de rango constitucional que ordena a los organismos del estado actuar conforme al principio de juricidad, sometiénose al marco legal establecido en la misma, circunstancia que en la especie no ha ocurrido, pues como se podrá verificar en la etapa procesal correspondiente, la prestación de servicios, efectuada por mi representado, no se llevó a cabo dentro del marco legal que establece el artículo 4° de la Ley N°18.883.

Con todo, y en abierta infracción al principio de rango constitucional denominado de “Juricidad”, la contratación de mi representado se realizó infringiendo el artículo 7° de la Constitución Política de la República ya que el Municipio celebró con ésta pseudos contratos a honorarios, no teniendo autoridad ni derecho conferido por ninguna ley donde expresamente se le haya otorgado la facultad para ello, puesto que dicha contratación en realidad se trató de un vínculo de carácter laboral, no siendo procedente en este caso particular la contratación a honorarios, a un trabajador al cual se le asignaran funciones habituales, permanentes y generales del municipio.



La infracción de la ex empleadora al Principio de Juricidad denunciada por esta parte demandante, se traduce en la práctica en el hecho de que efectivamente la Municipalidad teniendo la facultad para contratar a su representado bajo las normas del Código del Trabajo, y, además teniendo la facultad para contratarla bajo la norma del artículo 4° de la Ley N° 18.883, optó y con ello infringió este principio, por celebrar, con ésta, pseudos contratos de honorarios, cuando en la práctica la relación sostenida con la ex empleadora se desarrolló bajo un vínculo de subordinación y dependencia, siendo este tipo de vínculo propios y exclusivos de un contrato de trabajo. No cabe duda US., que la infracción denunciada se traduce específicamente en el momento en que el Municipio, aplicó un estatuto jurídico equívoco (honorarios), cuando en la práctica la funciones se desarrollaron dentro de otro distinto (laboral).

Agrega que el artículo 4° de la ley N° 18.883 faculta para contratar bajo la modalidad a honorarios para cometidos específicos y no habituales del municipio, sin embargo la contratación hecha a su representado, fue para realizar funciones generales y habituales de éste, por lo que la Municipalidad ha estado infringiendo constantemente la norma del artículo 7° de la Constitución Política de la República, puesto que los cometidos específicos y no habituales por los cuales se faculta a la Municipalidad a contratar no fueron tales en este caso, no estando facultada la ex empleadora para contratarlo bajo esa modalidad.

Que habiendo señalado que la relación fáctica entre su representado y la Municipalidad demandada sobrepasó los límites permitidos por el artículo 4 de la Ley N° 18.883, y, que de esa forma se infringió el principio constitucional de juricidad, al no estar autorizada la ex empleadora para celebrar con el demandante dicha contratación, cabe entonces determinar el estatuto jurídico aplicable a este caso particular.

Conforme lo anterior es necesario fijar el ámbito de aplicación del Código del Trabajo, que está establecido en el artículo 1°.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.



Que el artículo Primero del Código del Trabajo establece que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por dicho cuerpo legal, además se aplicarán sus leyes complementarias, por lo que en el inciso primero de este artículo se fijó por el legislador el ámbito de aplicación general del Código del Trabajo, a aquellas relaciones que se susciten entre empleadores y trabajadores.

Posteriormente en el inciso segundo se establece que las normas del Código del Trabajo no se aplicarán a los funcionarios de la administración del Estado, ya sea centralizada o descentralizada entre otros, siempre, y como señala textualmente el código, que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

En efecto, conforme lo anterior su representado nunca ocupó la calidad de funcionario municipal puesto que no fue contratado como personal de planta, contrata ni suplente, de lo cual queda descartada la hipótesis de que sus servicios se hayan realizado bajo el cargo de funcionario de la administración del Estado a través de un órgano del Estado descentralizado, como lo es el municipio.

Agrega que su contratación se realizó porque así lo permite el artículo 4° de la Ley N° 18.883, contratación que constituye una excepción dentro del Estatuto Administrativo de funcionarios Municipales, toda vez que permitió su vinculación con la ex empleadora a través de pseudos contratos de honorarios.

Con todo y en atención a lo anterior, es que si bien su contratación se realizó porque así lo permite una ley, es ésta misma quien ha fijado el marco de contratación y los requisitos para celebrar dichos contratos (labores accidentales y no habituales, cometidos específicos), exigencias que en el caso particular no se cumplieron durante todo el tiempo que duró la relación laboral, puesto que al contrario, los servicios que prestó su representado a favor de su ex empleadora se trataron en todo momento, de labores permanentes, esenciales y fundamentales del Municipio, además los trabajos que realizó se enmarcaron dentro de los servicios que la Municipalidad permanentemente realiza, por lo tanto éstos no pueden ser catalogados de ninguna manera como no habituales. Considerando además que los cometidos que presto bajo el poder de mando de su ex empleadora fueron generales y comunes, desarrollados por períodos extensos de tiempo, circunstancias todas que permiten excluir el carácter de específico de los mismos.



En atención a lo anterior y habiendo determinado que su contratación no se ajustó al ámbito de aplicación del artículo 4° de la Ley N° 18.883, y, que tampoco fue contratado bajo el régimen de planta, contrata o suplente, es que cabe preguntarse entonces cual es el régimen legal aplicable a los servicios prestados a favor de la demandada, cuya respuesta está en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo.

En efecto, el inciso tercero de la citada norma establece el régimen aplicable al supuesto de encontrarse un trabajador de la Administración del Estado en la situación en que sus labores no estén afectas a un estatuto especial, siendo en dicho caso aplicable la regla general y común, esto es las normas del Código del Trabajo. Conforme lo anterior, el Municipio estuvo facultado para contratar a su representado bajo las normas del Código del Trabajo, puesto que en este caso resulta aplicable el inciso tercero de la norma ya referida.

En atención a que la mandante prestó servicios como trabajador a favor de su ex empleadora dentro del ámbito de lo que se denomina un vínculo de subordinación y dependencia, para una entidad que corresponde a la administración descentralizada del Estado, no encontrándose afecto a ningún estatuto especial que rija su contratación, y, en plena aplicación del inciso tercero artículo 1° del Código del Trabajo, es que corresponde aplicar la regla general establecida en el inciso primero del ya referido artículo del Código del Trabajo, el que señala que la relación entre empleadores y trabajadores se regirán por dicho cuerpo legal.

En consecuencia, al disponer la ley que el personal contratado a honorarios no queda sujeto a las disposiciones del Estatuto Administrativo, precisamente porque no son funcionarios. Empero, si los servicios de una persona son contratados a “honorarios”, fuera de los casos autorizados por la ley, no puede invocarse esa misma legalidad quebrantada para asilarse en la imposibilidad de celebrar contratos de trabajo donde la ley no lo permitiría, porque ello importaría contrariar el Principio de Juricidad que debe gobernar los actos de la Administración, en el sentido que ésta es la primera llamada a respetar el bloque normativo fundamental y el Derecho no puede amparar la desprotección o precariedad, cuando los servicios se prestan bajo subordinación o dependencia.



De los antecedentes expuestos se desprende que las labores que ejecutó el trabajador, se desarrollaron bajo subordinación y dependencia, lo cual desestima las alegaciones que posiblemente argumentará la demandada, ya que invocará una contratación a honorarios conforme con el artículo 4° de la ley N° 18.883, porque esta contratación requiere que se trate de labores accidentales y no habituales de la Municipalidad o de cometidos específicos y que las labores se realicen por profesionales, técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, lo que no ocurrió en el caso de marras, ya que las labores que desempeñó, por su naturaleza son habituales del Municipio, lo que se evidencia con la sola constatación de la extensión de las mismas funciones.

Agrega que si se trata de una persona natural que no se encuentra sometido a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa normativa establece- planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, inconcuso resulta que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo o del Código Civil, conclusión que deriva de que en el caso se invoca el artículo 4° de la ley N° 18.883, norma que, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código de Trabajo, en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones, prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, según ya se dijo, no sólo porque la vigencia del Código del Trabajo constituye la regla general en el campo de las relaciones personales, sino porque no es dable admitir la informalidad laboral.

Jurisprudencia aplicable al caso de marras:

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, con fecha 01 de abril de 2015, en causa Rol N° 11.584-2014.

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema, en causa Rol N°31160-2016, con fecha 10 de noviembre de 2016.



Juzgado de Letras Lautaro

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema, en causa Rol N°5699-2015, de fecha 19 de abril de 2016.

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema, en causa Rol N°7091-2015 de fecha 28 de abril de 2016.

Jurisprudencia referida a la aplicación de la Sanción de Nulidad establecida en el artículo 162 inciso quinto y siguiente del Código del Trabajo.

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema, en causa Rol N°45842-2016 de fecha 7 de diciembre de 2016.

-Fallo rechaza Recurso de Unificación de Jurisprudencia interpuesto por la demandada, Corte Suprema en causa Rol N° 6604-2014 de fecha 31 de diciembre de 2014.

-Fallo acoge Recurso de Unificación de Jurisprudencia, dicta Sentencia de Reemplazo Corte Suprema, en causa Rol N° 8.318-2014 de fecha 3 de marzo de 2015.

-Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema, en causa Rol N°35232-2016, de fecha 10 de noviembre de 2016.

Principio de la Irrenunciabilidad de los derechos

Así las cosas, junto con la reciente jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema respecto de la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, se ha instaurado en los Tribunales Superiores de Justicia, para este tipo de casos, que el Derecho del Trabajo se caracteriza por la existencia de normas heterónomas, establecidas imperativamente por la autoridad, de derecho mínimo inderogable y de naturaleza indisponible, que se imponen sobre la voluntad de las partes y que se aplican de manera necesaria y directa al contrato laboral. En ese sentido la indisponibilidad significa que el trabajador no puede renunciar válidamente a los derechos que la norma establece en su favor, pues estos forman parte del contrato e ingresan a su patrimonio, y en esa lógica, corresponde a los tribunales garantizar su efectivo cumplimiento.

En este ámbito, es importante recalcar que los contratos de trabajos individuales y los convenios colectivos deben estar siempre subordinados a la ley y no pueden contener cláusulas de índole inferior a las que la propia ley considere mínimos, y bajo ningún respecto pueden establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables a las disposiciones legales y a los convenios colectivos suscritos con anterioridad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

No obstante, las restricciones a la autonomía a la voluntad de las partes que a priori se evidencian, el contrato de trabajo responde a ese mismo factor, en virtud del principio de igualdad, el que no desaparece dejando un terreno fértil para que se lleven a cabo acuerdos privados entre los contratantes o la decisión unilateral del empleador, en el ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, siempre que se expresen respetando los límites legales o convencionales.

El Principio de la Irrenunciabilidad puede ser definido como, la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más prerrogativas conferidas por el derecho del Trabajo en beneficio propio. Este postulado se encuentra establecido expresamente en el ordenamiento laboral, así, el Código del Trabajo en su artículo 5° inciso 2, señala de forma inequívoca que “los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”.

En otras palabras, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado inciso 2° del artículo 5° del Código del Trabajo, los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables. Dicha norma consagra lo que la doctrina laboral denomina “la irrenunciabilidad de derechos”, que, para unos, constituye una técnica del principio de protección, también llamado tuitivo, proteccionista o de favor, y, para otros, un principio propiamente tal, pero, en ambos casos, implica la “imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio”. Este postulado encuentra su fundamento en la circunstancia que el trabajador subordinado se encuentra en una situación de inferioridad socioeconómica respecto del empleador, por lo mismo, es la parte débil de la relación contractual, y porque el trabajo es precisamente lo que le proporciona los medios necesarios para sufragar sus gastos y los de su familia, provocándole su pérdida estados de incertidumbre, de zozobra; sin perjuicio que, además, el trabajo que regula el estatuto laboral es trascendental porque no solo representa la capacidad creadora del ser humano, sino porque proporciona las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse en la sociedad de manera integral.

Teoría de los Actos Propios en materia laboral.

Cabe advertir que, como posiblemente propondrá la demandada, en razón de aplicar la Teoría de los Actos Propios en contra de mi representado como manifestación del Principio general de Buena Fe, es necesario tener en consideración inciso 2° del artículo



5° del Código Laboral: “Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”.

En efecto, la calificación de laboralidad de un contrato es un derecho irrenunciable por excelencia. Si se cumplen los requisitos para que una vinculación sea considerada como laboral, esa calificación debe preferirse siempre, cualquiera que sea la denominación que le hayan asignado las partes, justamente porque está involucrado un derecho indisponible. (SIERRA, 22

Alfredo. “La Teoría de los Actos Propios en el Ámbito Laboral”. En: Cuadernos de Extensión Jurídica, Universidad de Los Andes N° 18, 2010, pp. 141 y US.). Lo contrario, supondría aceptar que el Derecho tolera que un acuerdo de voluntades viole o infrinja la ley.

En este sentido, no resulta procedente aplicar dicha teoría para el caso de marras, toda vez que operaría contra el trabajador la circunstancia de que hubiera consentido en la contratación a honorarios, sin protesta alguna durante toda la prestación de servicios. Esta aseveración es incorrecta en varios sentidos, así también lo ha entendido la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia al sostener que “dicha aseveración importa contrariar el principio de la primacía de la realidad, cuya manifestación más relevante es la de hacer que prevalezca lo que sucede en el terreno de los hechos, por sobre aquello que indiquen los documentos; es decir, actúa como un criterio de apreciación de la prueba, en la medida que permite desvirtuar el contenido instrumental, haciéndole perder toda la significación y valía; seguidamente, porque comporta desconocer tanto la frecuencia con la que se celebra este tipo de contratos en relación que, tras su escrutinio, son de índole laboral; y finalmente, porque significa olvidar proverbial asimetría de las partes contratantes en esta clase de asuntos, hasta llegar a la resignación de la libertad de una de ella, para mantener su fuente de ingresos” . Corte de Apelaciones de Santiago, 08.01.2014, Rol N° 1.205-2013.

Agrega que la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto de la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.833, se ha instaurado en los Tribunales Superiores de Justicia, para este tipo de casos, que el Derecho del Trabajo se caracteriza por la



existencia de normas heterónomas, establecidas imperativamente por la autoridad, de derecho mínimo inderogable y de naturaleza indisponible, que se imponen sobre la voluntad de las partes y que se aplican de manera necesaria y directa al contrato laboral. En ese sentido la indisponibilidad significa que el trabajador no puede renunciar válidamente a los derechos que la norma establece en su favor, pues estos forman parte del contrato e ingresan a su patrimonio, y en esa lógica, corresponde a los tribunales garantizar su efectivo cumplimiento.

En este ámbito, es importante recalcar que los contratos de trabajos individuales y los convenios colectivos deben estar siempre subordinados a la ley y no pueden contener cláusulas de índole inferior a las que la propia ley considere mínimos, y bajo ningún respecto pueden establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables a las disposiciones legales y a los convenios colectivos suscritos con anterioridad.

No obstante, las restricciones a la autonomía a la voluntad de las partes que a priori se evidencian, el contrato de trabajo responde a ese mismo factor, en virtud del principio de igualdad, el que no desaparece, dejando un terreno fértil para que se lleven a cabo acuerdos privados entre los contratantes o la decisión unilateral del empleador, en el ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, siempre que se expresen respetando los límites legales o convencionales.

El Principio de la Irrenunciabilidad puede ser definido como, la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más prerrogativas conferidas por el derecho del Trabajo en beneficio propio. Este postulado se encuentra establecido expresamente en el ordenamiento laboral, así, el Código del Trabajo en su artículo 5° inciso 2, señala de forma inequívoca que “los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”.

En otras palabras, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado inciso 2° del artículo 5° del Código del Trabajo, los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables. Dicha norma consagra lo que la doctrina laboral denomina “la irrenunciabilidad de derechos”, que, para unos, constituye una técnica del principio de protección, también llamado tuitivo, proteccionista o de favor, y, para otros, un principio propiamente tal, pero, en ambos casos, implica la “imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio



propio”. Este postulado encuentra su fundamento en la circunstancia que el trabajador subordinado se encuentra en una situación de inferioridad socioeconómica respecto del empleador, por lo mismo, es la parte débil de la relación contractual, y porque el trabajo es precisamente lo que le proporciona los medios necesarios para sufragar sus gastos y los de su familia, provocándole su pérdida estados de incertidumbre, de zozobra; sin perjuicio que, además, el trabajo que regula el estatuto laboral es trascendental porque no solo representa la capacidad creadora del ser humano, sino porque proporciona las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse en la sociedad de manera integral. Menciona el Fallo de Unificación de Jurisprudencia de fecha 04.08.2015, Rol N°24.091-2014.

Peticiones concretas

Existencia de relación laboral.

En virtud de la calificación jurídica de la relación laboral expuesta precedentemente entre las partes, solicita se declare que entre la demandada y su representado existió relación laboral entre el día 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2022, bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

Continuidad de los servicios.

En virtud de lo expuesto solicita que se declare la continuidad de los servicios prestados por el mandante a favor de la Ilustre Municipalidad de Perquenco desde el 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2022.

Indemnizaciones adeudadas.

Con motivo del despido indirecto de su representado, la demandada adeuda los siguientes conceptos que se señalan: a) en virtud del inciso 4° del artículo 162° del Código del Trabajo, la sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$650.000. b) En virtud del inciso 2° del artículo 163 del Código del Trabajo, la indemnización por años de servicios correspondientes a 10 años y fracción superior a 6 meses: \$7.150.000.- c) En virtud de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio: \$3.575.000.- 4. Feriado legal y proporcional. Por estos conceptos la demandada le adeuda a su mandante la siguiente partida correspondiente a los feriados devengados: a) Feriado legal: \$4.550.000.-, que equivalen a



Juzgado de Letras Lautaro

210 días (10 años). b) Feriado proporcional: \$452.400.-, que equivalen a 20,88 días (11 meses y 28 días).

Otras prestaciones.

A las sumas por indemnizaciones, sus recargos y compensación de feriado detalladas precedentemente, cabe agregar las que provienen de: A. Cotizaciones de seguridad social durante todo el periodo que duró la relación laboral. B. Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”.

SEGUNDO: Con fecha cuatro de abril del año dos mil veintitrés, el abogado Cristian Montesinos Tropa, Run 13.965.667-9, en representación, como mandatario convencional, de la Ilustre Municipalidad de Perquenco, Corporación Autónoma de derecho público, Rut 69.190.300-1, ambos con domicilio calle Esmeralda 497 de la comuna de Perquenco, viene en contestar la demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad de despido, despido indirecto y cobro de prestaciones laborales adeudadas interpuesta por don Edgar Lizardo Topp Crisóstomo en contra de la Ilustre Municipalidad de Perquenco en razón de los argumentos de hecho y de derecho que a continuación expone:

Hechos.

Respecto de los hechos vertidos en la demanda, los niega expresamente, principalmente aquellos que dicen relación con la existencia de una relación laboral. Solo reconoce como ciertos los expresados en esta contestación.

Que, para dar contexto a los hechos expresados por la demandante, señala que el prestador de servicios comenzó a prestar los mismos, en el año 2012 como “Encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Perquenco”, cargo evidentemente accidental y funciones no habituales efectuadas por el Municipio que por cierto no se encuentran descritas en la ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Que durante el 2022 sus honorarios correspondían a aproximadamente \$650.000.- El prestador debe emitir un informe mensual de actividades, entre las cuales se desarrollaban: Realizar atención a público, archivar documentos, llevar sistema integral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

social, cursos para mejorar el servicio, analizar posibilidad de acceso a beneficios para usuarios del programa, entre otras funciones.

Agrega que en el pacto de honorarios se dejó establecido con claridad que el prestador de servicios no es funcionario municipal y que de sus honorarios no se le descontarán las cotizaciones previsionales porque se trata de un contrato de honorarios.

Finalmente, la demandante presta sus servicios hasta el día 30 de diciembre del año 2022.

Importante es señalar que las prestaciones que ejecutaba el prestador de servicios, eran de las que la propia ley no define como tareas privativas del Municipio y que se encuentran definidas en el artículo 3 de la ley 18695, es más, el financiamiento de los programas que financiaban sus tareas era de distintos servicios públicos y de diferentes programas de estos, quedando claramente expresada la carencia de la continuidad solicitada en la demanda de autos.

Expone que el artículo 4 de la ley 18883, expresa y autoriza a la administración municipal para la ejecución de tareas accidentales, y que no sean habituales de la Municipalidad, claramente: archivar documentos, encuestar, llevar sistema integral social, cursos para mejorar el servicio, analizar posibilidad de acceso a beneficios para usuarios del programa, entre otras funciones... no constituyen tareas propias del Municipio al alero del artículo 3 de la ley 18695 tantas veces referida

Hace mención a fallo del Tribunal de Letras del Trabajo de San Miguel, quien en causa rol O-333-2020 de fecha 12 de abril del año en curso.

Dicho lo anterior, conviene indicar que el razonamiento efectuado por el máximo Tribunal, tiene su fundamento en la circunstancia que el Código de Trabajo, constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad laboral que no tiene justificación alguna.

Agrega que la Excelentísima Corte Suprema, expone que “tal calificación no implica, en ningún caso, desconocer la facultad de la administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4° de la Ley N°18.883, esto es, cuando necesite de profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias y



que deban realizar labores accidentales, no habituales, o se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos; razón por la que no se presenta algún problema de colisión entre las normas del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo de determinación de los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso, para discernir qué regla es pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4º, siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios, a través del cual la administración municipal, pueda contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales”; análisis, que permite establecer entonces que no en todos los casos resulta posible dar aplicación supletoria de la legislación laboral, a quienes prestaron servicios para el órgano estatal, determinación que constituye el objeto central del presente fallo, en especial si se considera que es el propio artículo 1º del Código del Trabajo el que expresamente dispone: “Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”. En tal sentido y conforme a lo que se viene analizando si bien es posible reconocer la existencia de abundante jurisprudencia que ha establecido la aplicación de supletoria del Código del Trabajo a quienes han prestado servicio para órganos del estado, ello sólo se ha producido en cuanto su contratación no respetó los márgenes establecidos en los estatutos que la propia vinculación les regula, y que en el caso específico de los funcionarios a honorarios, como bien se sabe, es el artículo 4 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que dispone que dicha contratación solo resulta aplicable en ciertos y determinados casos, pues la contratación a honorarios respecto a las hipótesis del mencionado artículo, debe entenderse a quienes sean contratados para desarrollar una labor accidental y no habitual del organismo, entendiendo por esto último, a aquellas que son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que, cometidos específicos, lo constituyen las labores puntuales, es decir, aquéllas que



están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal.

Inexistencia de la relación laboral.

Expone que el demandante nunca se ha desempeñado como trabajadora sujeta a las normas del código del Trabajo. Al contrario, siempre se ha desempeñado bajo diversos contratos de honorarios, aprobados por el correspondiente decreto alcaldicio, conforme faculta el artículo 4 de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales. En consecuencia, se niega la relación laboral en dichos periodos.

Fundamental aspecto, es que el prestador de servicios ha suscrito sucesivos contratos a honorarios como Trabajadora Social en varios programas gubernamentales tales como programa social de hogares, los cuales están fuera del presupuesto municipal, ya que los recursos que lo financian vienen otorgados por Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, con quien se celebran los respectivos convenios de financiamiento y ejecución.

Señala que cada contrato de prestación de servicios ha tenido un diferente monto de honorarios y diferentes obligaciones y beneficios, hechos fundamentales para resolver adecuadamente el presente caso.

Agrega que la prestadora ha realizado servicios específicos en la Municipalidad de Perquenco, dentro de los referidos programas provenientes de programa social de hogares, entre otros, como Encuestador, función que no puede considerarse inmersa dentro de las facultades propias señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695

Señala que no es efectivo que se hubiere llevado a cabo por el demandante, durante el lapso en que se prestaron servicios en sede civil, labores bajo subordinación o dependencia, menos con la intención de sustraerse del cumplimiento de obligaciones laborales por parte del municipio, como sostiene la contraria, sino que se cumplió estrictamente la ley, que nos faculta a realizar este tipo de contrataciones y los dictámenes de Contraloría General de la República.

Reitera que la Municipalidad de Perquenco, como órgano autónomo de la Administración del Estado, tiene una serie de deberes y funciones los que se encuentran establecidos en el artículo 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,



entre ellos, la salud, educación, deporte, cultura y aseo y ornato, por nombrar sólo algunas. Pues bien, para la contratación de los funcionarios municipales, cada municipalidad tiene que encuadrarse en la ley de plantas y dictar un reglamento para su aplicación. Este es el denominado personal de planta que se encuentra determinado por ley. Debido a lo exiguo de la planta y a la gran carga de labores que llevan a cabo las municipalidades, se autoriza la contratación transitoria de personas para desarrollar tareas propias del municipio, estos son los denominados funcionarios a contrata.

Este es el conjunto de funcionarios públicos, plantas y contrata, que están a cargo de llevar a cabo las funciones que se refiere el artículo 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y se dividen en las secciones o direcciones tales como la unidad de Secretaría municipal, Control municipal, Administración Municipal, Dirección de Obras, Finanzas, Dirección de Tránsito, entre otras.

Pero también hay otras tareas que es necesario realizar, que son complementarios a la función municipal, de las cuales el personal denominados funcionarios públicos, no da abasto para su satisfacción, para lo cual, el artículo 3 y 4 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales Ley N° 18.883, abre la puerta para contratar a los denominados servidores públicos, entre los que se considera a los funcionarios honorarios y Código del Trabajo.

En consecuencia, no se reúnen los elementos que permiten configurar una relación laboral, respecto a la contratación que se efectúa a vía de honorarios, principalmente, por la naturaleza la actividad llevada a cabo por la prestadora de servicios, esto es, como Encuestador, a través de un programa gubernamental, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, entre otros.

En tal sentido, se ha resuelto por la Corte Suprema, que cuando la prestación a realizar por el contratado a honorarios, es de idéntica naturaleza a las funciones que se han entregado por ley a las Municipalidades, tales como la función de aseo, corresponde calificar a la contratación a honorarios, como una función propia, habitual y permanente del Municipio y que no puede entenderse como ocasional o específica, por lo cual, necesariamente, habrá que aplicar el Código del Trabajo.

Sin embargo, en el caso que les ocupa, el prestador de servicios, en los últimos años, puesto que han variado los programas en los cuales prestó servicios, realizó una labor



determinada dentro de un programa gubernamental dependiente de FOSIS, función específica que no se encuentra descrita en las funciones propias que al efecto señalan los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que, puede entenderse que ésta es de carácter impropia, ocasional y no permanente, ya que no se encuentra dentro de las potestades públicas de las Municipalidades.

De esta forma, en los casos de prestadores a honorarios, que no presten labores entregadas a las Municipalidades por ley, como lo es desarrollar programas anexos a las funciones municipales (registro social de hogares), no se aplicará el Código del Trabajo, en el entendido de que se trata de labores accidentales, configurándose la aplicación del referido artículo 4 del Estatuto para funcionarios Municipales.

Para efectos de ilustrar su interpretación hace mención a la Sentencia Dictada en causa Rol Corte Suprema N°5699-2015:

En consecuencia, tratándose de un contrato en que se especificaron las funciones del servidor a honorarios- encuestador en programa gubernamental registro social de hogares , entre otros- y siendo ésta una función ajena a los fines de la esencia de la Municipalidad de Perquenco, pues se trata de la ejecución de un programa anexo al Municipio, corresponde rechazar la demanda en todas sus partes, ya que se ha contratado correctamente al prestador de servicios y no se configura, además, una relación laboral.

Agrega que no se trata de un cargo estable, permanente e indispensable en la organización jerárquica del municipio, ya que su ejecución está supeditada a la transferencia de recursos extrapresupuestarios por parte de MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y anterior a ello los recursos deben ser aprobados mediante ley de presupuesto nacional a través de las respectivas glosas y partidas.

Improcedencia de que se condene al pago de cotizaciones previsionales: falta de legitimación pasiva de este municipio.

Expone que no posee esta Municipalidad legitimación pasiva para ser demandada y condenada al pago de las cotizaciones previsionales, ni aún en el improbable evento que se declare como laboral la relación de autos, toda vez que, por normativa, es el empleador quien retiene el monto de las cotizaciones previsionales, debiendo soportar el



Juzgado de Letras Lautaro

pago de aquel monto, el trabajador. Más aún, en este caso la Municipalidad no ha descontado monto alguno de los honorarios del actor.

De esta forma, es absolutamente improcedente que se imponga una carga legal a este Municipio de soportar este valor, menos aun cuando estos montos fueron contenidos en el honorario bruto, pues sería desconocer que la obligación de imponer recae en el Prestador del Servicio y el “supuesto empleador” es sólo una especie de mandatario habilitado para descontar, retener y pagar aquel monto.

A mayor abundamiento, esto implicaría un desconocimiento de la doctrina de los actos propios, según la cual, si un sujeto define su posición jurídica mediante el desarrollo de determinadas conductas, no le es lícito desconocer, posteriormente, sus propias actuaciones. En efecto, fue el propio prestador de servicios quien se ha aprovechado de la prestación de servicios durante diez años, percibiendo una cantidad mayor que la que le correspondería si se hubiera procedido al descuento y pago de las cotizaciones previsionales y de salud. Que, ha percibido las devoluciones de impuestos sin tributar como dependiente, para luego desconocer absolutamente dicha situación, pretendiendo obtener un gran beneficio económico de aquello.

En subsidio: otras alegaciones, excepciones y defensas.

Para el caso improbable que SSa. estime que la relación contractual que ligó al demandante y a la Municipalidad es de carácter laboral y se deben aplicar las normas del Código del Trabajo, interpone las siguientes alegaciones y excepciones respecto de las prestaciones demandadas:

Excepción de prescripción de la acción de cobro de prestaciones relativa al feriado legal. Hace mención al artículo 510 del Código del Trabajo.

Expone que la demanda fue notificada a la parte demandada, con fecha 7 de marzo de 2023, por lo que todo feriado legal percibido con anterioridad al 7 de marzo de 2021 se encuentra prescrito, en atención a que han transcurrido con creces los plazos señalados.

Por tanto, solicita se declare la prescripción extintiva de todo feriado legal o proporcional, devengado con anterioridad al 7 de marzo de 2021.

Excepción de pago o cumplimiento, respecto del feriado no prescrito.



De acuerdo a la prescripción solicitada en el punto anterior, restaría acreditar el hecho de que el actor hizo uso de feriado establecido en su contrato, correspondiente a quince días hábiles, devengado con posterioridad a marzo de 2021.

Que el feriado correspondiente al año 2021 fue utilizado por el demandante desde en la proporción que se acreditara en la correspondiente etapa procesal.

A su vez, el feriado correspondiente a la anualidad de 2022, fue utilizado por el demandante, en la proporción que se acreditara en la correspondiente etapa procesal.

Por tanto, interpone la excepción de cumplimiento respecto de los feriados legales devengados en los años 2021 y 2022, ya que fueron utilizados por el demandante.

Improcedencia de la sanción de nulidad del despido.

Agrega que la Corte Suprema ha sostenido un criterio uniforme en los últimos años en cuanto a que la sanción de nulidad de despido no procede respecto de trabajadores a honorarios contratados por la administración del Estado. Ha señalado que cuando se trata, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la administración del estado, pues concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. En estos casos, se desnaturaliza la sanción, por cuanto los órganos del estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la administración del estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.



Juzgado de Letras Lautaro

En este sentido, menciona la Sentencia de la Corte Suprema sobre recurso de unificación de jurisprudencia Rol N°37.266-2017, Rol 37.339-2017, 40.253-2017, 39.621-2017, 42.441- 2017, 4544-2019, 14279-2019, 19127-2019.

Compensación

En el caso que se estimare que los contratos civiles firmados en realidad son laborales, se opone excepción de compensación de la deuda que se señalará.

Tal como se ha sostenido, por ley corresponde al trabajador soportar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud. Ahora bien, según el análisis de los contratos suscritos, se puede desprender, que es al prestador de servicios, a quien le correspondía afiliarse y enterar cada mes el valor de las cotizaciones previsionales de salud, con cargo al honorario bruto.

Pues bien, esta obligación, como se puede concluir de la demanda impetrada, no ha sido cumplida por el actor.

Es por esto que procede la excepción de compensación fundada en el incumplimiento de la obligación de enterar las referidas cotizaciones, hasta por el valor del 20% del honorario bruto estipulado en los contratos, o el monto que S.S., estime en derecho.

Conclusiones.

- Que no existió relación laboral entre las partes, y que por ende no se da lugar al despido indirecto, ni a la nulidad del despido ni a las demás prestaciones demandadas, con costas.

- En subsidio; para el caso improbable que se estime que existió relación laboral entre las partes,

Solicita se acojan las alegaciones y excepciones opuestas en esta contestación, con costas.

TERCERO: Con fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, se lleva a efecto la audiencia preparatoria de juicio, en la cual se llamó a las partes a conciliación, la cual fue frustrada por lo que se fijaron los siguientes hechos a probar:

1.) Efectividad de que el demandante fue contratado formalmente sobre la base de honorarios por la municipalidad demandada. En su caso, contrato(s) celebrado(s) entre las partes; época de inicio y término del (los) mismo(s), y existencia de continuidad o interrupción entre tales convenciones.



- 2.) Determinación de los servicios para los cuales fue contratado el actor por la demandada. Habitualidad o temporalidad de dicha prestación de servicios. Jornada de trabajo pactada, y contraprestación en dinero convenida en razón de sus funciones.
 - 3.) Efectividad de que el actor ejecutó o se desempeñó efectivamente en las labores o funciones contratadas. Hechos y circunstancias.
 - 4.) Efectividad de que el actor prestó servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada, en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo. Indicios de laboralidad que concurren en la especie.
 - 5.) Antecedentes del término de la relación laboral mantenida entre las partes. Formalidades cumplidas por el actor para poner término a su contrato de trabajo, en los términos de los artículos 162 y 171 del Código del Trabajo. Hechos y circunstancias.
 - 6.) Efectividad de que la parte demandada incurrió en la causal de caducidad invocada por el actor, contemplada en el N° 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Hechos y circunstancias.
 - 7.) Procedencia de las indemnizaciones demandadas y de sus recargos, en los términos del artículo 171 del Código del Trabajo. En la afirmativa, monto de la última remuneración mensual devengada por el actor.
 - 8.) Efectividad de haberse devengado y, en su caso, hecho uso o compensado los feriados reclamados en la demanda. En su caso, número de días, base de cálculo y monto a que ascienden los mismos.
 - 9.) Estado de las cotizaciones de seguridad social de la demandante la época del término de su contratación. Procedencia de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, respecto de la corporación edilicia demandada.
 - 10.) Efectividad de configurarse las excepciones de prescripción de la acción de cobro de la compensación de los feriados reclamados, así como de pago o cumplimiento de los mismos beneficios no prescritos, de falta de legitimación pasiva y de compensación.
- Hechos que lo acreditan

CUARTO: En la audiencia de juicio celebrada con fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés, la parte demandante para acreditar su pretensión incorporo los siguientes medios de prueba:



Juzgado de Letras Lautaro

A) Testimonial:

Comparece don PABLO EDUARDO MÜLLER ZUÑIGA, RUN 17.402.309-8, de 32 años de edad, técnico en administración, con domicilio Balmaceda N°65, comuna de Perquenco, cuyas declaraciones constan íntegramente en registro de audio, quien previamente juramentado en síntesis expone lo siguiente:

Que conoce al demandante en el trabajo, desde el año 2011, cuando trabajaba en el Municipio de Perquenco, quien trabaja en la DIDECO

El demandante estaba como encuestador del registro Social y ejecutaba otras funciones, pero era más administrativo, atendía público, salía a terreno y entrevistaba a las personas para el registro.

Las otras funciones que realizaba el demandante eran las que le encomendaban los días sábados, en operativos, ordenara la bodega, armar toldos para cuando había actividades, estas labores eran distintas a lo que debía hacer.

Al demandante si bien se trasladaba en camioneta de la municipalidad para asistir donde las familias, también tomaba su bicicleta para ir cuando era necesario.

Las funciones del demandante eran encomendadas por la jefe del departamento de la DIDECO, Claudia Mellado, esas funciones se realizaban en el módulo de atención al público y en terreno en el domicilio de las personas, este módulo se encontraba en el 2do piso del servicio, tenía el demandante un escritorio, un computador, silla y todo eso era entregado por el Municipio.

El demandante realizaba sus funciones desde las 08:30 horas a las 17:30 horas, en algunas ocasiones pasaban esas horas, cuando se requería hacer el registro de los datos de las personas.

El horario del demandante se verifica mediante un reloj de control, este se encontraba en el 1er piso del edificio, y todos los funcionarios debían hacer uso de este control.

El demandante trabajo en el Municipio hasta diciembre del año 2022

Señala que el testigo trabaja de planta en la Municipalidad.

Contrainterrogatorio

Se le pregunta en que programa trabajaba el demandante, a lo que responde, en el registro Social de Hogares, el año 2011 en adelante y era el de encuestador.



Se le pregunta como tomo conocimiento de los hechos de que el demandante realizaba las encuestas fuera de horario, a lo que responde, que lo sabe por lo que le contaba el demandante y porque también lo vio algunas veces que voluntariamente iba en su bicicleta a visitar a las personas, fuera del horario de trabajo.

Señala que la relación contractual del demandante con la Municipalidad era a honorarios y lo que debe hacer para recibir su sueldo, era que debía cumplir con sus labores, encuestar, se debía hacer un informe, adjuntar con su boleta de honorarios.

La remuneración del demandante venia del Registro Social de hogares del Ministerio respectivo.

B) Confesional:

Se hace presente que no comparece a absolver posiciones, el representante legal del demandado, I. Municipalidad de Perquenco, por lo que el abogado de la parte demandante solicita se haga efectivo el apercibimiento legal del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

C) Documental:

1. Carta de auto despido emitida por el actor, don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO, con destino a la I. Municipalidad de Perquenco, y comprobante de envío de esta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 30 de diciembre de 2022.
2. Carta de comunicación de auto despido emitida por el actor, don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO, con destino a la Inspección Comunal del Trabajo de Lautaro, y comprobante de envío de esta a través de correspondencia certificada vía Correos de Chile, ambos documentos de fecha 30 de diciembre de 2022.
3. Decreto exento N°269 de fecha 31 de enero de 2012.
4. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2012.
5. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 03 de mayo de 2013.
6. Decreto exento N°2018 de fecha 01 de agosto de 2013. 7. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de agosto de 2013.
8. Decreto exento N°2015 de fecha 12 de agosto de 2014.
9. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 12 de agosto de 2014.
10. Decreto exento N°2953 de fecha 24 de noviembre de 2014.



Juzgado de Letras Lautaro

11. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 24 de noviembre de 2014.
12. Decreto exento N°684 de fecha 24 de junio de 2015.
13. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 24 de junio de 2015.
14. Decreto N°018 de fecha 04 de enero de 2016.
15. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2016.
16. Decreto N°681 de fecha 04 de julio de 2016.
17. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 04 de julio de
18. Decreto N°035 de fecha 06 de enero de 2017.
19. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2017.
20. Decreto N°0029 de fecha 02 de enero de 2018.
21. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2018.
22. Decreto exento N°0522 de fecha 21 de junio de 2018.
23. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 20 de junio de 2018.
24. Decreto N°0057 de fecha 08 de enero de 2019.
25. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2019.
26. Decreto exento N°0857 de fecha 10 de julio de 2019.
27. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 08 de julio de 2019.
28. Decreto N°0119 de fecha 20 de enero de 2020.
29. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2020.
30. Decreto exento N°545 de fecha 07 de julio de 2020.
31. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 07 de julio de 2020.
32. Decreto N°35 de fecha 05 de enero de 2021.
33. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2021.
34. Decreto exento N°89 de fecha 13 de enero de 2022.
35. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de enero de 2022.
36. Decreto exento N°491 de fecha 14 de abril de 2022.
37. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de abril de 2022.
38. Decreto N°1056 de fecha 06 de octubre de 2022.
39. Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 01 de octubre de 2022.



Juzgado de Letras Lautaro

40. Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con destino a la I. Municipalidad de Perquenco, junto a sus respectivos informes mensuales de actividades, correspondientes al periodo que va desde el año 2012 al 2022.

41. memorándum N°085 de fecha 16 de mayo de 2013.

42. Imágenes en color de 02 credenciales institucionales del actor.

43. 17 fotografías en color del actor desempeñándose en funciones.

D) Exhibición de documentos

La parte demandada exhibe en este acto los documentos solicitados por la parte demandante de acuerdo a los puntos solicitados en audiencia preparatoria y respecto de los cuales la parte demandante declara:

1.- Respecto al N°1, la parte demandada solo dio cumplimiento en forma parcial, habiendo exhibido solo 4 contratos de los solicitados.

2.- Respecto al N°2, La parte demandante señala que la parte demandada solo dio cumplimiento en forma parcial, habiendo exhibido solo 4 decretos de los solicitados.

3.- Respecto al N°3, que la parte demandada, no acompañó Informes de gestión mensual, trimestral, semestral y/o anual, por lo que no se da cumplimiento a lo ordenado.

4.- Respecto al N°4, que la parte demandada, no acompañó Libro de control de asistencia o registro de asistencia, por lo que no da cumplimiento a lo ordenado y solicita la aplicación del apercibimiento.

Se tiene por cumplido parcialmente respecto de los puntos 1 y 2 y por no cumplido los puntos 3 y 4, por lo que resolverá en la sentencia definitiva respecto del apercibimiento solicitado.

E) Oficios:

La parte incorpora como medio de prueba, previa lectura extractada respuestas oficios remitidas por AFP HABITAT S.A, FONASA y AFC CHILE S.A., que dan cuenta de estado de pago de cotizaciones previsionales del actor, con individualización de agentes retenedores, respecto del demandante don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO cédula nacional de identidad N°15.562.264-4.

QUINTO: Por su parte la demandada Municipalidad de Perquenco, incorporo en la audiencia de juicio ya señalada, los siguientes medios de prueba:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

A) Testimonial:

1.- Comparece doña CLAUDIA ALICIA MELLADO MARÍN, RUN N°16.164.589-3, soltera, trabajadora social, 36 años, directora de Desarrollo Comunitario de Perquenco, con domicilio en calle Prat N°795, de la comuna de Perquenco, quien previamente juramentado en síntesis expone lo siguiente: Que conoce las partes de este juicio, el demandante es don Edgard Topp y la otra parte es la municipalidad de Perquenco.

Que conoce a don Edgardo desde el pueblo por ser vecino, y por su relación con la municipalidad de Perquenco desde que llegó a ser parte de la DIDECO, en junio del 2021.

Agrega que la relación contractual que tenía don Edgard con la municipalidad era trabajador a honorarios. Que su función era de encuestador del registro social de hogares. Que no tenía horario de trabajo, esta labor la realizaba a raíz de un convenio que existe entre la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Que el Convenio se firma de forma anual y el Ministerio nos transfiere dineros para que contratemos a la persona que realizan las labores de encuestador para que se pague su sueldo.

Señala que si es que no se suscribe el convenio no existiría la función de él, por lo tanto, no debiese ser obligación del municipio tener que contratarlo porque no es una función del municipio el encuestar a las personas para el registro social de hogares. Que sabe de dónde provienen los recursos con los que se le pagaba don Edgardo, los recursos provienen del convenio entre la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Que, para pagar los estipendios a Don Edgard Top, debía evacuar un informe de lo realizado durante el mes y su respectiva boleta y que eso también se incluye dentro del decreto que se entrega al Ministerio para justificar el uso del recurso que ellos les transfirieron. Que le visaba los informes mensuales la encargada comunal del registro social hogares, la señora Alejandra Ulloa y luego llevaban una visación suya.

Contrainterrogatorio_



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

Que, si la encargada comunal o ella no visan el informe que emite don Edgar Topp, lo que pasa es que en realidad nunca sucede eso que alguien no lo vise, porque es informe todos los días dice labores administrativas. Que no lo visaría solamente porque esa persona no está y lo visaría el subrogante de esa persona, que el efecto de que no se vise dicho documento, es que no existiría la no visación, porque si no lo dice el titular lo va a visar el subrogante siempre va a haber una visación. Cuando solo se emite la boleta de horarios más no del informe, que debe ser visado por el encargado, se le solicita al funcionario que lo elabore, ya que esos 2, son lo que se necesita para cursar el pago, para que se adjunte al decreto de pago y sin vía del Ministerio para justificar el gasto.

Que no. Conoce el contenido de los 2 últimos contratos a honorarios celebrados entre la Municipalidad y don Edgard, porque no los elaboro ella, los elaboró la unidad de personal, solamente cuando ella llego, en el año 2021, leyó los que tenían. Que en contratos a honorarios suscritos por Edgar Topp desde el año 2021 en adelante desconoce cuáles son los días de trabajo y el horario del ingreso al servicio, porque no elaboro esos contratos. Que el de 2021, que es el que ella leyó, por lo que recuerda, no aparecía estipulado de tal día a tal día ni en qué horario. Que respecto a beneficios de don Edgar en el contrato que leyó, cree que contenía días de descanso.

2.-Comprace doña OLGA ENRIQUETA BERTON SAAVEDRA, cedula de identidad número 12.275.466-9, 51 años, casada, contador, Encargada de Personal de la I. Municipalidad de Perquenco, con domicilio en calle Saavedra N°495, de la comuna de Perquenco, quien previamente juramentado en síntesis expone lo siguiente:

Que conoce las partes de este juicio, Edgar Topp Crisóstomo que está aquí y la municipalidad de Perquenco. Que lo conoce desde el año 2012 que llego al municipio, lleva alrededor de 11 años, prestando servicios.

Señala que es encargada de personal de la municipalidad de Perquenco. Que ella ingreso a trabajar el 16 de enero del 2009 a la municipalidad. Que estaba en conocimiento de las contrataciones que se le hizo a don Edgardo, por el cargo que llevaba y en algunos casos, tuvo que confeccionar su contrato. Que don Edgar Topp trabajaba como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

encuestador del programa en un programa del Ministerio de desarrollo social para la Ficha de protección social.

Que él demandante ingreso a trabajar como encuestador como en el 2012 más menos, por lo que el investigo. Que no trabajó en otro programa, siempre yo lo vi vinculado al tema como encuestador. Que él era prestador de servicio, con contrato honorario, pagado con recursos financiados por el programa. Que son recursos extra presupuestarios, los recursos vienen del Ministerio del Desarrollo social. Que existió un convenio entre la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social firmado, porque de acuerdo al convenio, los convenios siempre vienen asociados que llegue una persona a ejecutar el convenio y ahí fue donde se contrató a Edgard como encuestador. Que, si el convenio no se suscribe en un año determinado, se prescindiría del servicio del prestador, o sea, en este caso, del contrato honorario, porque si no hay convenio, ellos como municipio, las tareas no son privativas del municipio, entonces al no ser privativa, no hay un vínculo con el prestador de servicio. Que don Edgar, cumplía un horario en la mañana, quedaba y pero no, era más en terreno por ser un encuestador de la ficha de protección social. Que don Edgard para poder percibir el pago de sus servicios, tener los requisitos, tener algún título o algún técnico, pero en la práctica, para él recibir su pago mensual debía presentar su boleta más el informe de las tareas que el realizaba. Que en lo relativo al informe tenía que entregarlo a fin de mes. Que este informe podía ser rechazado de parte de la encargada del programa. Que, si se rechaza un informe, no se les podría cancelar su servicio.

Agrega que en cuanto a si existe un procedimiento para que pueda reelaborar el informe y poder percibir el dinero, cree que en ese caso, si la jefa de que estaba a cargo de él, vio que no cumplió con su función, ya no la cumplió, tendría que demostrar que realizó las tareas encomendadas, que tendría la posibilidad de complementar el informe, claro porque puede él no sé a lo mejor presentar alguna licencia médica, que no que no pudo encomendadas, que tendría la posibilidad de complementar el informe claro porque puede él no sé a lo mejor por alguna licencia médica.

Contra interrogada:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNXXGRXHK

Juzgado de Letras Lautaro

Don Edgar ingresaba en la mañana a las 8:30 a la Municipalidad. Que ella lo sabe por qué don Edgard marcaba el reloj biométrico, ubicado en la entrada del Municipio. Que todos los funcionarios que están trabajando, deben marcar.

B) Confesional:

Comparece a prestar declaración, el demandante don EDGAR TOPP CRISÓSTOMO, lo que consta íntegramente y en síntesis señala lo siguiente:

Se le pregunta desde cuándo se encuentra vinculado con la Municipalidad, a lo que responde desde el año 2011 al año 2022, mediante un contrato de honorarios.

Que trabajaba para el departamento Social, sus funciones y labores estaban en el contrato.

Esta para hacer encuestas para el registro social de hogares.

Las direcciones llegaban al Ministerio y de la Municipalidad.

Entre las funciones eran de encuestar en terreno, recopilar datos, ordenar las fichas y además hacer actividades que no están en el contrato.

Para recibir el dinero debía hacer un informe mensual de la realizado, con las funciones del mes y debía emitir la boleta de honorarios para recibir el ingreso correspondiente.

En cuanto a los programas siempre estaba en el programa de registro social de hogares.

El ministerio de desarrollo social tenía el vínculo y temas municipales y ellos hacían llegar el dinero.

C) Documental:

1. Decreto A. N°35, de fecha 05 de enero de 2021, origen Ilustre Municipalidad de Perquenco, que aprueba contrato a honorarios encuestador registro social de hogares, Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
2. Contrato de prestación de servicios a honorarios entre Ilustre Municipalidad de Perquenco y el Sr. Edgar Topp Crisóstomo, de fecha 01 de enero de 2021.
3. Decreto A. E. N°89, de fecha 13 de enero de 2022, origen Ilustre Municipalidad de Perquenco, que aprueba contrato a honorarios encuestador registro social de hogares, Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
4. Contrato de prestación de servicios a honorarios entre Ilustre Municipalidad de Perquenco y el Sr. Edgar Topp Crisóstomo, de fecha 01 de enero de 2022.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

5. Decreto A. E. N°491, de fecha 14 de abril de 2022, origen Ilustre Municipalidad de Perquenco, que aprueba contrato a honorarios encuestador registro social de hogares, Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
6. Contrato de prestación de servicios a honorarios entre Ilustre Municipalidad de Perquenco y el Sr. Edgar Topp Crisóstomo, de fecha 01 de abril de 2022.
7. Solicitud de permiso administrativo para el día 15 y 16 de septiembre de 2021 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
8. Decreto A. E. N°1.056, de fecha 06 de octubre de 2022, origen Ilustre Municipalidad de Perquenco, que aprueba contrato a honorarios encuestador registro social de hogares, Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
9. Contrato de prestación de servicios a honorarios entre Ilustre Municipalidad de Perquenco y el Sr. Edgar Topp Crisóstomo, de fecha 01 de octubre de 2022.
10. Solicitud de permiso administrativo desde el 22 al 24 de diciembre de 2021 y feriado legal desde el 28 de diciembre de 2021 al 18 de enero del 2022, por parte de la actora del Sr. Edgar
11. Solicitud de permiso administrativo para el 29 de marzo de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
12. Solicitud de permiso administrativo para el 08 de abril de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
13. Solicitud de permiso administrativo para el día 14 de abril de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
14. Solicitud de permiso administrativo para el día 27 de mayo de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
15. Solicitud de permiso administrativo para el día 03 de mayo de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
16. Solicitud de permiso administrativo para el día 02 de agosto de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
17. Solicitud de permiso administrativo para el día 25 de agosto de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo
18. Solicitud de permiso administrativo para el día 17 de octubre de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.



Juzgado de Letras Lautaro

19. Solicitud de permiso administrativo para el día 07 de diciembre de 2022 por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
20. Solicitud de permiso administrativo por los días 6, 7, 9 y 10 de diciembre de 2021 y feriado legal desde el día 13 al 31 de diciembre de 2021, por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
21. Solicitud de feriado legal por los días desde el 12 al 30 de diciembre 2022, por parte del Sr. Edgar Topp Crisóstomo.
22. Certificado N°37 de fecha 12 de abril de 2023, emitido por parte del secretario Municipal de Perquenco Sr. Rubén Millar Ettori, firmado digitalmente y que contiene comprobante denominado tarjeta de asistencia del Sr. Edgar Topp Crisóstomo, documento que consta de 4 páginas, respecto del marcaje reloj control por los meses de septiembre 2021, diciembre 2021 y diciembre 2022.
23. Dictamen N°E188491/2022, de fecha 24 de febrero de 2022, origen Contraloría Regional de la Araucanía.

D) Oficio: remitido por la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA.

SEXTO: Que previo a resolver el fondo, y de acuerdo a lo solicitado por el demandante, respecto de la no comparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, no obstante encontrarse legalmente notificado, se hará efectivo el apercibimiento del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, por lo que se presumirán efectivas, en relación a los hechos objeto de prueba, de acuerdo a lo que se dirá en los motivos siguientes.

En lo que respecta a la exhibición de documentos, habiéndose cumplido parcialmente lo solicitado por el actor, en lo que respecto de los puntos 1 y 2 y no cumplido los puntos 3 y 4, se hará efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo y se tendrán por probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada, conforme a lo que se dirá en el numerando séptimo.

SEPTIMO: En cuanto al fondo: Con la prueba rendida en estos autos, apreciada conforma a las reglas de la sana critica, tomando para ello especial consideración la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK

precisión, concordancia y conexión de los hechos, a juicio de esta Juez, se tienen por acreditado los siguientes hechos de la causa:

1.- Que don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO fue nombrado como Encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Perquenco, en calidad de “Contrata”, que sus funciones eran realizadas en la Dirección de desarrollo Comunitario de la municipalidad de Perquenco desde el_02 de enero de 2012 y el 30 de diciembre de 2022, en calidad de “Contrata”, tal como dan cuenta los respectivos decretos alcaldios de nombramiento.

2.-Que no obstante lo anterior, durante los años que estuvo en la municipalidad de Perquenco, el actor realizo labores habituales, conforme a las órdenes recibidas de su jefatura directa y además cumplía un horario determinado, conforme lo expuesto por los testigos de la parte demandante y las presunciones acogidas, ante la incomparecencia del demandado a declarar y la no exhibición completa de los documentos solicitados.

3.-Que, el 30 de diciembre de 2022, don, EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO conforme lo establece el artículo 171 inciso 4º del Código del Trabajo, decidió autodespedirse, y en consecuencia comunicó por escrito a la demandada, su decisión de poner término al contrato de trabajo por haber incurrido ésta en la causal contemplada en el artículo 160 N°7 del mismo cuerpo normativo, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, enviando copia de esta comunicación a la respectiva Inspección Comunal. Señala que los mencionados incumplimientos establecidos en la carta de despido indirecto que se atribuyeron a la ex empleadora de su representado son los siguientes: -El no pago de las cotizaciones de Seguridad Social. Que se traduce en el incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Ley 3.500, asimismo se infringe lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo. -La no escrituración del Contrato de Trabajo. Lo que se opone directamente a lo establecido en el Artículo 9º del Código del Trabajo - No otorgamiento del feriado legal durante el periodo trabajado, en conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo.



4.- Que la remuneración percibida por el actor al momento de finalizar su contratación con la Municipalidad Perquenco ascendía a \$650.000, lo cual además es reconocido por la demandada y tal como cuentan en las últimas boletas de honorarios

OCTAVO: Ahora bien, con respecto a la existencia de contratación laboral, es importante tener presente que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°19.695 en su artículo 32, establece que el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones. Agregando que, para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios municipales el alcalde y las demás personas que integren las plantas de personal de las municipalidades.

Por otra parte, el mencionado Estatuto administrativo para funcionarios municipales, Ley N°18.883, dispone en su artículo primero que *“El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades. Seguidamente señala que Los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos.”*

Agrega igualmente la misma disposición legal que, los cargos de planta son aquéllos que conforman la organización estable de la municipalidad y sólo podrán corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley N°18.695. Respecto de las demás actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el sector privado.

Que, además, la misma ley expone que, las municipalidades podrán considerar en su dotación cargos a contrata, que podrán tener el carácter de transitorios.

NOVENO: Que, no obstante, lo expuesto precedentemente, al tener por acreditados los hechos enunciados en el numerando séptimo, es necesario tener presente, lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°18.883, que establece: *“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad*



que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto ”. Dicha normativa implica, en la práctica, que el contrato a honorarios constituye un mecanismo de prestación de servicios en virtud del cual la Municipalidad puede contar con asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias de su actividad, siempre que sean de un carácter esporádico y digan relación con una materia específica y puntual, entendiendo por tales aquéllas que, no obstante ser propias de la función municipal, sean ocasionales, es decir, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata, además, de recaer en funciones específicas y determinadas, pudiendo, excepcionalmente, consistir en labores propias y habituales del municipio pero nunca en forma permanente bajo esa modalidad jurídica.

Que en relación a lo anterior, y como ya se señaló anteriormente, el artículo 1 de la misma ley, establece que las Municipalidades cuentan con una dotación de personal permanente y otra transitoria, conformada por funcionarios de planta y contrata, respectivamente, a los que se suman las personas que sirven labores en calidad de contratados a honorarios, quienes constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no revisten la calidad de funcionario público, por lo que en definitiva, a este tipo de personal contratado, sólo les asisten los derechos que establece el contrato.

Que por su parte artículo 1º del Código del Trabajo, contempla y establece el ámbito de aplicación de dicho texto, expresando, en lo pertinente: *“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.* De tal contenido, se



desprende en su inciso primero, que el Código del ramo resulta atingente a todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores reuniéndose los requisitos del artículo 7 de ese cuerpo legal que define el contrato de trabajo, sosteniendo que *“es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”* por lo que, en consecuencia, debe tratarse de servicios personales remunerados, efectuados bajo dependencia o subordinación.

DÉCIMO: Que de acuerdo al examen de las circunstancias efectivas de la relación que vinculaba al actor con la demandada, y lo ya establecido en los considerandos precedentes; es posible entender que entre las partes existía una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Ramo. En efecto, se ha acreditado fehacientemente por el actor, que, desde el 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2022, fue contratado para prestar servicios a honorarios, aparentemente bajo los supuestos del artículo 4 de la Ley 18.833, pero lo cierto es, que la contratación no se condice con dicha normativa.

Por cuanto como ya se ha señalado, el artículo 4 ya referido, establece la posibilidad de contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, lo que no ocurría en el caso de autos, en donde el actor desde el inicio de su contratación a honorarios realizó las mismas funciones para las que ya había sido contratado en su calidad de contrata anteriormente y que consistían mayormente en labores de encuestador y atención de casos” en el Programa de Registro social de hogares dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que dicen relación con un servicios constante para el logro de objetivos y cumplimientos de funciones que establece el artículo 3 de la ley orgánica constitucional del servicio, dependiendo directamente de la dirección de obras y la dirección de administración para ello, por lo demás, no pueden considerarse como funciones no habituales dado que el actor realizó las mismas por 10 años.

Tampoco se trata de aquellas labores que puedan encuadrarse en los *“cometidos específicos”*, pues las funciones para que fuera contratado el actor dicen relación con



funciones propias de la entidad edilicia, como lo son el encuestador y demás ordenes impartidas por su jefatura directa.

En consecuencia, no encuadrándose labores contratadas y realizadas por el demandante, en los supuestos del artículo 4 de la Ley N°18.833 que autorizan en determinadas condiciones la contratación a honorarios, es forzoso aplicar el Código del Trabajo, de acuerdo a lo previsto en los artículos citados, debidamente relacionados con el 420 letra a) y 485 del Código del Trabajo, debiendo en consecuencia rechazarse la defensa del municipio respecto de la inexistencia de relación laboral.

UNDÉCIMO: Despejado lo anterior, corresponde determinar la procedencia de las acciones de nulidad de despido y despido indirecto intentadas por el actor.

En cuanto a la declaración de nulidad y cobro de cotizaciones previsionales, se ha considerado que la declaración de existencia de una relación de naturaleza laboral entre un particular y los Órganos de la Administración del Estado respecto de un vínculo iniciado y ejecutado bajo las normas de la prestación de servicios a honorarios, no otorga el derecho a reclamar la sanción de nulidad del despido ni el cobro de cotizaciones previsionales, por cuanto en la medida que aquella figura se encontraba, en principio, amparada en un estatuto legal, gozaba de una presunción de legalidad que excluye la obligación del órgano público de pagar cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral en la medida que esta hipótesis no se condice con la naturaleza de la sanción contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo ni con las injusticias que aquella normativa pretende evitar, más aún cuando a diferencia de una empresa, los órganos de Estado no están facultados para hacer uso libremente de recursos a fin de convalidar el despido en los términos señalados en la aludida norma.

Que por otra parte, debemos tener presente el principio de legalidad que rige los actos de la administración del Estado y dado la modalidad de contratación del actor, la municipalidad de Perquenco, se encontraba impedida de proceder al pago de cotizaciones previsionales relacionadas con un vínculo formalmente ejecutado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, lo que incluso hubiera incurrido en una ilegalidad de la cual se podrían derivar la diversas responsabilidades, por lo que la demandada se encontraba, además, jurídicamente imposibilitada de pagar cotizaciones previsionales al demandante, no pudiendo por estas razones ser aplicada la



sanción del artículo 162 inciso quinto y séptimo del Código del Trabajo desechándose la demanda en este punto como se dirá.

DECIMOSEGUNDO: En lo que respecta a la acción de despido indirecto, si bien es un hecho que el municipio demandado durante la vigencia del vínculo no pagó al actor las cotizaciones previsionales, de salud y seguridad social, no escrituró contrato de trabajo y no otorgo feriado legal al actor, que son los incumplimientos alegados por el demandante para fundar la causal de despido indirecto invocado, se estima que no resulta procedente el autodespido del trabajador en la medida que el municipio no se encontraba legalmente facultado para realizar las acciones que se le atribuyen como incumplimiento.

En efecto, sin perjuicio que esta sentenciadora haya determinado que, entre las partes, existió un vínculo de naturaleza laboral, es importante tener en consideración el principio de legalidad que rige el proceder de los órganos de la administración del Estado, del cual ya hemos enunciado, y explicado en los numerando precedentes.

Por lo que, no es admisible fundar una acción de despido indirecto en incumplimientos respecto de los cuales la demandada se encontraba jurídicamente imposibilitada de ejecutar, no procede instalar los hechos descritos por el actor, el de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, debiendo por estas razones ser desestimada la demanda de despido indirecto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7, 8, 53, 162, 163, 168, 171, 172, 173, 415 63, 160 N°7, 162, 163, 168, 172, 173, 445, 446, 452, 453, 454, 456 y 459 y siguientes del Código del Trabajo; Ley N°18.883, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE la demanda de declaración de existencia de relación laboral presentada por don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO, en contra de la Ilustre Municipalidad de Perquenco, declarándose que entre el actor EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO y la municipalidad de Perquenco existió una relación de naturaleza laboral que inicio el dos de enero del año dos mil doce y concluyo el día treinta de diciembre del año dos mil veintidós.

II.- Que SE RECHAZA en todas sus partes la demanda de nulidad de despido y despido indirecto presentada por don EDGAR LIZARDO TOPP CRISÓSTOMO, en contra de la Ilustre Municipalidad de Perquenco.



Juzgado de Letras Lautaro

III.- Que no habiendo resultado ninguna de las partes completamente vencida no habrá condena en costas.

Notifíquese por correo electrónico a través de los abogados.

RIT O-14-2023

RUC 23- 4-0460994-7

DEJO CONSTANCIA: Que esta sentencia fue dictada por doña **ARACELY JIMENA VASQUEZ ACUÑA**, Juez Suplente del Juzgado de Letras en lo laboral de Lautaro, y solo es firmada por el juez que suscribe, para efectos de ingresarla al sistema informático de tramitación.

En Lautaro a seis de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCNCXXGRXHK